

C.A. de Santiago

Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5464-2019, se acogió la demanda y condenó en forma solidaria a las demandas Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada y Compañía Minera Lumina Copper Chile, a pagar en forma solidaria, las indemnizaciones y prestaciones, respecto de los 80 demandantes; declarando que cada parte pagará sus costas.

La demandada hizo valer –dos causales en forma subsidiaria - siendo la primera, es la del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se ha dictado con infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica, y en particular denunció como infringidos los principios de la razón suficiente y no contradicción, en cuanto al periodo efectivo que trabajaron 19 demandadas bajo el régimen de subcontratación.

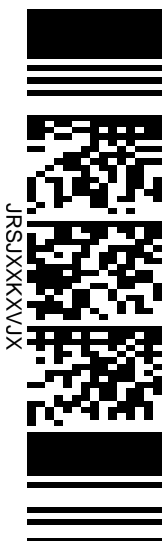
La segunda causal esgrimida es aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley a los artículos 183-C y 183-D inciso primero, ambos del Código del Trabajo, referentes al tipo de responsabilidad de la empresa principal, en relación con el artículo 129 de la Ley N°20.720.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes y se comunica que la presente causa ha quedado en estado de estudio.

Considerando:

Primero: Que, la causal esgrimida en primer lugar por el recurrente es aquella contemplada en el artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando el fallo se ha dictado con infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica

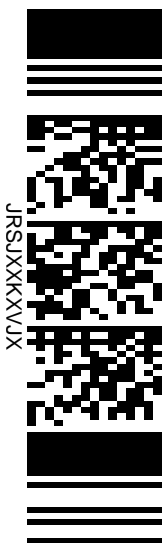
Argumenta que la infracción se manifiesta en el considerando Décimo sexto, pues la sentenciadora analizando los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, denominados F-30-1, decidió que todos los demandantes (es decir los 61 actores) trabajaron en régimen de subcontratación para Minera Lumina durante toda la relación laboral que existió con INDAK, salvo 19 actores, cuyo mes desde el cual trabajaron en régimen de subcontratación se delimitó



desde agosto a diciembre del año 2012. Sin embargo, siguiendo el mismo criterio de la sentenciadora, y analizando precisamente los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales F-30-1 acompañados por vía documental así como en respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo, los 19 actores señalados prestaron servicios en régimen de subcontratación por un periodo aún más limitado que el que la sentencia señala, pues entre los meses de Enero de 2013 hasta diciembre de 2013 (1 año) ninguno de ellos aparecen en la nómina del contrato vigente. Así, de los contratos y anexo de contratos de los actores se desprende que la prestación de servicios fue en un comienzo inexistente y posteriormente esporádica, para luego, sólo en el año 2014 convertirse en trabajo subcontratado de carácter permanente. En efecto, señala que de la prueba aportada se desprende que los demandantes Sres. Yaite, Bravo, Ruz, Salinas, Isla, Rozas, Arriagada, Parraguez, Cortes, Morales, Oyanedel, Aguilera Araya, Aguilera Molina, Varas, Briceño, Pinilla y Huerta no figuran en las nóminas de trabajadores durante el año 2013, encontrándose únicamente desde el año 2014 hasta el año 2019.

Sostiene que se infringe el principio de la identidad, porque una cosa solo sólo puede ser igual a sí misma, y en este caso, los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales aportados por su defensa en el juicio, correspondiente a un sinnúmero de contratos civiles que celebró con la empresa Indak, son iguales a sí mismos, y ninguno de dichos documentos en el periodo de 2013 cuyo único contrato vigente era el N°583 tiene registrado como trabajadores subcontratados a los demandantes que se indican en el cuadro.

Agrega que, de acuerdo a la prueba documental de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales incorporados en el proceso, revisados por el sentenciador y que son los considerados para limitar el periodo de subcontratación respecto de 19 actores, seguido a al razonamiento de que la continuidad de los servicios es un requisito para que haya trabajo en régimen de subcontratación, entonces se infringe el principio de la no contradicción, porque periodos discontinuos es contrario a periodos continuos de prestación de servicios, y, por lo tanto, se contradice la sentencia si considera periodos en los que no existe ningún documento que acredite que en el año 2013 prestaron servicios en régimen de subcontratación.



Se infringe el principio de la razón suficiente, porque no hay justificación lógica que permita suplir la inexistencia de datos -específicamente de prueba documental y testimonial de los 19 demandantes que reafirmen la veracidad de lo que piden “trabajar en régimen de subcontratación durante todo el periodo en que existió relación laboral con INDAK”.

Finalmente agrega que el yerro se produce por cuanto la valoración de la prueba que el sentenciador realiza para determinar la limitación temporal de la responsabilidad de subcontratación en el caso de los 19 actores señalados la hace en su conjunto, pero, no la considera de manera individual, y es esta última la que permite delimitar aún más el período subcontratado, pues se evidencia que el único contrato vigente entre Lumina e Indak durante el año 2013 era aquel denominado N°583, y analizando los certificados de obligaciones laborales y previsionales demuestra que durante todo el año 2013, los 17 demandantes no prestaron servicios en régimen de subcontratación en aquel periodo.

Al no haberse analizado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, sin atender su multiplicidad, gravedad, precisión concordancia y conexión, la sentencia vulnera los principios de la lógica, vicio que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia dictada en el presente juicio, pues de haberse analizado los elementos probatorios rendidos conforme a la lógica y multiplicidad de los mismos, no existiría la disparidad entre los elementos aportados al juicio y la decisión final del tribunal.

Segundo: Que la causal invocada requiere, para ser acogida, los siguientes requisitos: a) que el recurrente singularice cuáles fueron los medios de prueba omitidos; b) que el sentenciador efectivamente haya omitido el análisis de determinados medios de prueba en su sentencia; y c) que esa omisión influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Tercero: Que, respecto del primer presupuesto, lo cierto es que del examen del recurso, se puede apreciar que, el recurrente más allá de señalar que se omitió la valoración de determinados medios de prueba, lo que alega, es que el juez a quo tuvo por acreditado, respecto de 19 trabajadores un periodo de subcontratación mayor al verdaderamente acreditado, solicitando se acote el periodo desde el año 2014, por no existir medios probatorios



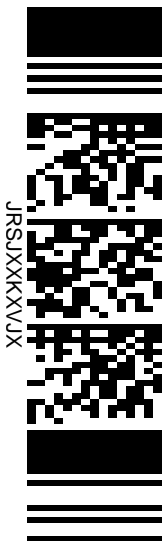
que acrediten el periodo desde el año 2012 fijado en la sentencia.

Cuarto: Que, en cuanto al segundo presupuesto, contrario a lo señalado por la recurrente, el tribunal sí analizó los medios de prueba que la parte aduce omitidos, por cuanto en el considerando Undécimo y siguientes, valora, pondera y considera los documentos denominados “Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”, permitiéndole acreditar que la demandada SCM Minera Lumina Copper Chile, dueña del Proyecto Minero Caserones, en el cual se desarrollaran diversos servicios contratados a la demandada Ingeniería y Maquinaria Indak Limitada, como contratista, a lo menos entre los años 2011 a 2019.

Y particular, aquellos aportado a Folio N°38 en la cual se indica que, al mes de diciembre del año 2012, existían 211 trabajadores bajo el régimen de subcontratación, respecto de los cuales en el mismo documento se adjunta una nómina con el detalle por mes de los trabajadores declarados y en aquel listado constan como trabajadores para SCM Lumina Cooper Chile los 19 trabajadores aludidos en este punto en el recurso de nulidad.

Lo anterior es suficiente para colegir que sí hubo análisis de la prueba rendida, constatándose que más que una omisión, el recurrente se limita a discrepar respecto del valor probatorio y el raciocinio empleado por la sentenciadora para determinar que los trabajadores Manuel Yaite Leiva, Dagoberto Bravo Fuentes, Julio Ruz Uribe, Luis Salinas Regular, Alejandro Isla Montecinos, Eduardo Rozas Flores, Juan Arriagada Norambuena, Luis Parraguez Calderón, Frede Cortes Vega, Jaime Morales Cabello, Washington Oyanedel Hernández, Carlos Aguilera Araya, Carlos Aguilera Molina, Juan Godoy Hidalgo, Claudio Varas Yáñez, Milton Briceño Olivares, Juan Valenzuela Jara, Paola Pinilla Concha y Cristian Huerta Urriche que establece prestaron servicios en régimen de subcontratación desde el año 2012, tal como se constató en la sentencia recurrida, por lo que el reproche del recurso en este tópico no es efectiva.

Quinto: Que, entonces, se puede concluir que lo pretendido por la demandada es que esta Corte valore nuevamente la prueba y concluya que el régimen de subcontratación de estos 19 trabajadores, únicamente se desarrolló desde el año 2014, pretensión que no cabe en un recurso de esta naturaleza, que es de impugnación, en que el



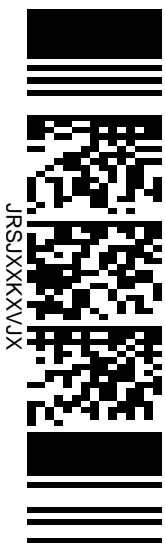
vicio debe ser demostrado por quien lo alega y no es un recurso de mérito, como la apelación, en que es el Tribunal de Alzada el que debe revisar si la sentencia está bien fundada, en cuanto a los hechos y al derecho.

En consecuencia, la causal invocada carece de todo fundamento, por lo que el recurso debe ser desestimado.

Sexto: Que, respecto de la segunda causal invocada en el recurso por la demandada solidaria, es aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en particular por infracción a los artículos 183-C y 183-D inciso primero, ambos del Código del Trabajo, referentes al tipo de responsabilidad de la empresa principal, en relación con el artículo 129 de la Ley N°20.720.

En este sentido señala que la infracción de las normas señaladas significó que la sentencia condenara a su representada al pago solidario de las prestaciones reclamadas con motivo de la acción, desconociendo el ejercicio de información y retención ejercido.

Agrega que la sentenciadora determinó en el considerando *“DECIMO QUINTO: Que, establecido lo anterior, corresponde revisar si la demandada COMPAÑÍA MINERA LUMINA COPPER CHILE, debe responder solidaria o subsidiariamente de las indemnizaciones y prestaciones que se ordenaron pagar a los demandantes. Que, según ya se dijo, la referida demandada aportó abundante prueba documental consistente en certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo que remitió también estos certificados, sin embargo, aquellos no abarcan todo el periodo trabajado en régimen de subcontratación por los actores, así como tampoco se encuentran en todos estos certificados adjunta la nómina de trabajadores respectivos, tal como ocurre, a vía ejemplar, en aquellos de los meses de junio y julio año 2018, contrato 1664, julio, julio y septiembre de 2018, y marzo de 2019, contrato 1442, y noviembre de 2013 contrato 583; que, por consiguiente, es dable concluir que no se ejerció el derecho de información en forma íntegra, incumpliendo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 183-C del Código del Trabajo”,* indicando además en el párrafo siguiente que *“por tanto, resulta dable concluir que la demandada debió haber ejercido el derecho de retención para proceder al pago de la deuda previsional que reportaba su contratista y demandada principal respecto de los meses*

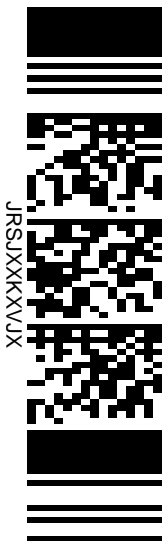


indicados, lo que no ocurrió, incumpliendo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 183-C, ya citado. Que, por consiguiente, la demandada COMPAÑÍA MINERA LUMINA COPPER CHILE, deberá responder en forma solidaria de las prestaciones que se ordenan pagar al empleador de los actores, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 183-D del Código del Ramo, en forma proporcional al tiempo trabajado en régimen de subcontratación, según se dirá en el considerando siguiente de esta sentencia.”

Sin embargo, si bien no hay duda de que faltaron algunos certificados de cumplimiento de obligaciones laborales –por varios factores, uno de ellos el temporal- pero, ante dicha situación se ejerció el derecho de retención y los dineros fueron entregados a la liquidadora por exigirlo así la ley especialísima, así las cosas, se ejerció el derecho de información durante años, y en la última etapa, el ejercicio del derecho de retención se efectuó a través de la entrega de los fondos a la Liquidadora, persona que legalmente está facultada. La sentencia infringe los artículos 183-C y 183-D inciso primero, ambos del Código del Trabajo, desatendiendo lo dispuesto por el legislador laboral y concursal, por cuanto según lo alegado y acreditado en autos, a Lumina no le cabe responsabilidad solidaria, sino que subsidiaria.

Finalmente expone que si la sentencia hubiese aplicado correctamente las normas de los artículos 183-C y 183-D inciso primero, del Código del Trabajo, en relación con el artículo 129 de la Ley N°20.720, se habrían tenido por ejercidos los derechos de información y retención, por los certificados y documentos aportados por esta defensa, que señalan que la empresa principal ejerció todos sus derechos conforme la ley, siendo responsable de manera subsidiaria.

Séptimo: Que, virtud de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, no pueden ser alterados los hechos establecidos en la sentencia que se impugna por vía del presente recurso de nulidad, de manera que a esta Corte sólo le corresponde determinar si han sido bien aplicadas las normas legales que la recurrente estima infringidas, a los hechos que se dieron por acreditados por la sentenciadora de base, en atención a que se arribó a las siguientes convenciones probatorias, entre las partes: “1. *Que entre la demandada principal reconoce las fechas de inicio de los servicios de los demandantes y las funciones desarrolladas.* 2. *Que la demandada*

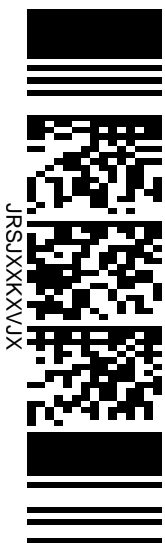


principal se encuentra declara en Liquidación concursal por resolución del 24° Juzgado Civil de Santiago, pronunciada el día 03 de junio del año 2019. 3. La demandada principal reconoce adeudar los conceptos de indemnización sustitutiva de aviso previo, años de servicio, feriado legal y proporcional, remuneraciones de julio del año 2019, por los montos señalados en la presentación efectuada el día 4 de septiembre del año 2019.”

Cabe mencionar que la sentencia impugnada en su considerando Quinto, indica que se recibió la causa a prueba fijándose entre otros el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido, a saber, en el punto seis: *“Si la demandada SCM MINERA COPPER CHILE, tiene responsabilidad solidaria o subsidiaria en la presente causa y si los actores se desempeñaron para ella bajo vínculo de subcontratación. Periodo por el cual tuvo lugar dicho vínculo para el caso de haber existido y si dicha demandada ejerció sus derechos de retención e información.”*

Octavo: Que, se estableció en el considerando undécimo del fallo impugnado “Que, del mérito de la abundante prueba documental acompañada al proceso por las partes, resulta posible, en primer término, indicar que efectivamente las demandadas de autos se encontraron vinculadas mediante diversos contratos de prestación de servicios” según da cuenta en el considerando en comento. Y a continuación la sentenciadora de base en el considerando que sigue indica que “...resulta posible establecer la existencia de régimen de subcontratación entre las demandadas, siendo la demandada SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE, dueña del Proyecto Minero Caserones en el cual se desarrollaran diversos servicios contratados a la demandada INGENIERIA Y MAQUINARIA INDAK LIMITADA, como contratista, a lo menos entre los años 2011 a 2019.”

Que además se estableció como hecho en el considerando décimo tercero: “...en relación a la prestación de servicios de los actores para la demandada SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE, en régimen de subcontratación, se ha logrado establecer la afectividad de aquello, a través de los contratos de trabajo, anexos, liquidaciones de remuneraciones de los trabajadores, y, en particular, a través de los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales

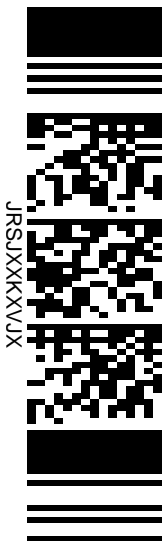


acompañados por aquella demandada, y respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo...”

Además la sentenciadora tuvo por “...acreditado la existencia del régimen de subcontratación entre las demandadas, el cual se desarrolló en virtud de diversos contratos celebrados para la prestación de servicios, así como también, se ha logrado comprobar que los demandantes prestaron servicios en dicho régimen para la demandada COMPAÑÍA MINERA LUMINA COPPER CHILE, toda vez que, en la mayoría de los casos, existe un contrato de trabajo y/o anexo que da cuenta de las labores de los actores para dicha demandada...”.

Otro hecho sentado en el fallo impugnado lo encontramos en el considerando Décimo quinto, “Que, según ya se dijo, la referida demandada aportó abundante prueba documental consistente en certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y respuesta de oficio de la Dirección del Trabajo que remitió también estos certificados, sin embargo, aquellos no abarcan todo el periodo trabajado en régimen de subcontratación por los actores, así como tampoco se encuentran en todos estos certificados adjunta la nómina de trabajadores respectivos, tal como ocurre, a vía ejemplar, en aquellos de los meses de unió y julio año 2019, contrato 1664, julio, julio y septiembre de 2019, y marzo de 2019, contrato 1442, y noviembre de 2013 contrato 583; que , por consiguiente, es dable concluir que no se ejerció el derecho de información en forma íntegra, incumpliendo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 183-C del Código del Trabajo.”

Otro hecho que dejó establecida la sentencia impugnada es que la demandada principal presentaba deuda previsional de algunos trabajadores ya en el año 2013, y algunos periodos del año 2014, 2017, por lo que “...la demandada debió haber ejercido el derecho de retención para proceder al pago de la deuda previsional que reportaba su contratista y demandada principal respecto de los meses indicados, lo que no ocurrió, incumpliendo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 183-c, ya citado.” Por lo cual “...la demandada COMPAÑÍA MINERA LUMINA COPPER CHILE, deberá responder en forma solidaria de las prestaciones que se ordenan pagar al empleador de los actores, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 183-D del Código del



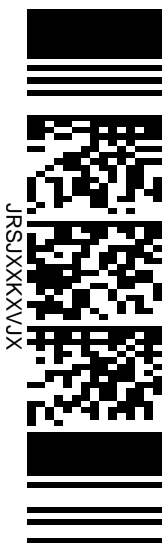
Ramo, en forma proporcional al tiempo trabajado en régimen de subcontratación...”.

Noveno: Que, finalmente la sentenciadora de base, refiere en el considerando Décimo octavo, “...que se desestimarán las argumentaciones formuladas en la contestación de la demandada por parte de COMPAÑÍA MINERA LUMINA COPPER CHILE, referentes a que de aplicarse la Ley N°20.720, toda vez que la circunstancia de haber puesto a disposición de la liquidadora montos retenidos de la demandada principal, en ningún caso la liberta de su obligación de responder solidariamente o subsidiariamente porque la legislación laboral no lo contempla, más aún teniendo presente que ya desde el año 2013, aquella presentaba incumplimiento de obligaciones previsionales, situación conocida por la mandante, tal como consta de los respectivos certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales referidos...”.

Décimo: Que, de acuerdo a la causal de nulidad en comento, no se pueden modificar los hechos establecidos en la sentencia.

Ahora bien, en cuanto a la efectividad que la demandada solidaria o subsidiaria ejerció los derechos de información y retención, la sentenciadora apreciando la prueba rendida de acuerdo a las normas de la sana crítica, concluyó que no se ejerció el derecho de información en forma íntegra, incumpliendo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 183-C del Código del Trabajo, ya que esta norma no establece un lapso de tiempo al que se pueda reducir la presentación de los referidos certificados en juicio para que la empresa principal se exima de la responsabilidad solidaria. Como así, también concluye la sentenciadora que la demandada principal, presentaba deuda previsional de algunos trabajadores, por lo que concluye que la demandada debió haber ejercido el derecho de retención para proceder al pago de la deuda previsional que reportaba su contratista y demandada principal lo que no ocurrió por lo que incumplió lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo.

Que, ningún derecho cede en favor de otro, sino que ambos deben ser exigencias que la recurrente debió cumplir a fin de evitar la consecuencia que establece el legislador. Esto quedó asentado en el fallo impugnado, ya que se acreditó que no se dio cumplimiento íntegro al derecho de ser informado, por lo que la consecuencia legal ha de ser

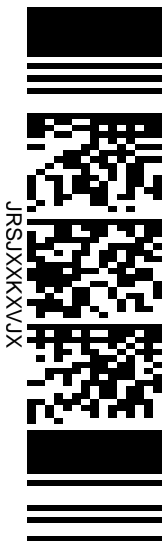


responder de manera solidaria tal como lo indica el artículo 183-D del Código del Trabajo.

Que la sentencia recurrida con la basta prueba presentada en juicio, la ponderación y el razonamiento de la misma, se estableció que la recurrente debe responder en forma solidaria de las prestaciones que se ordenaron pagar al empleador de los actores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-D del Código del Trabajo, en la forma como indicó la sentencia de base.

Undécimo: Que, es menester además indicar que en el recurso de nulidad se alega una infracción al artículo 129 de la Ley N°20.720, el cual en lo pertinente refiere que: *“Artículo 129: Resolución de Liquidación. La Resolución de Liquidación contendrá, además de lo establecido en los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:*

- 1.- En caso de ser procedente, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el Deudor.*
- 2.- La determinación de si el Deudor es una Empresa Deudora, individualizándola.*
- 3.- La designación de un Liquidador titular y de uno suplente, ambos en carácter de provisionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de esta ley, y la orden al Liquidador para que incaute todos los bienes del Deudor, sus libros y documentos bajo inventario, y de que se le preste, para este objeto, el auxilio de la fuerza pública, con la exhibición de la copia autorizada de la Resolución de Liquidación.*
- 4.- La orden para que las oficinas de correos entreguen al Liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor.*
- 5.- La orden de acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo las excepciones legales.*
- 6.- La advertencia al público que no pague ni entregue mercaderías al Deudor, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al Deudor para que los pongan, dentro de tercero, a disposición del Liquidador.*
- 7.- La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de treinta días contado*



desde la fecha de la publicación de la Resolución de Liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de ser afectaos por los resultados del juicio sin nueva citación.

8.- La orden de notificar, por el medio más expedito posible, la Resolución de Liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República.

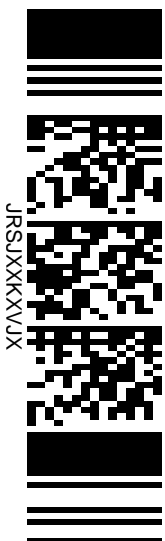
9.- La orden de inscribir la Resolución de Liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al Deudor, y de anotarla al margen de la inscripción social de la Empresa Deudora en el Registro de Comercio, si fuere procedente.

10.- La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera Junta de Acreedores.

La Resolución de Liquidación se notificará al Deudor, a los acreedores y a terceros por medio de su publicación en el Boletín Concursal y contra ella procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla, y para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.”

Que claramente en la Ley N°20.720, no existe ninguna disposición que libere a la recurrente de la exigencia de cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 183-C y 183-D, por lo cual debe responder solidariamente, tal como lo sostiene la jueza de base, y es más tampoco se extingue su responsabilidad solidaria si dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 129 de la ley N°20.720, por cuanto la referida disposición no extingue, no libera, a la recurrente de la obligación de ejercer los derechos de información y de retención a la luz de los artículos 183-C y 183-D, cuestión que ha quedado asentado no cumplió de manera íntegra la recurrente, por lo cual no se observa infracción de ley alguna en el presente fallo, sino que solo una legítima discrepancia de los razonamientos y ponderaciones efectuadas por la jueza de base.

Que, así las cosas, al rechazar la alegación de la recurrente, la sentencia no ha incurrido tampoco en la causal de nulidad del artículo



477 del Código del Trabajo en relación a los artículos 183-C y 183-D, en relación al artículo 129 de la Ley N° 20.720.

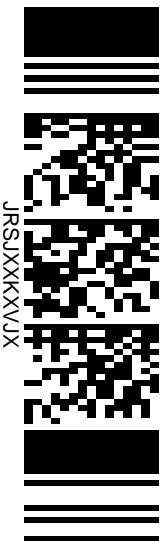
Por estas razones, más lo dispuesto en los artículos 477, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada contra de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5464-2019, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (S) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

N° Laboral - Cobranza-2005-2021.

Pronunciada por la **Duodécima** Sala, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, e integrada además, por la Ministro señora Mireya López Miranda y el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón. La Ministra señora López, no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse haciendo uso de permiso.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a trece de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

